

el error y antes de disponerse de la carga ni de poderse en consecuencia cometer fraude; y segundo, porque "lo que se concede á una parte no debe negarse á la otra," y el fisco tiene acción para reclamar el error cometido por los empleados en el despacho ó liquidación de los derechos, á fin de que el erario no se perjudique, al menos entre tanto no se cancelen las fianzas que deben otorgar los comerciantes para disponer de sus mercancías; que el espíritu manifiesto de la ordenanza, es favorecer al comercio de buena fé hasta donde lo permitan los intereses de la hacienda pública, y en el caso está patente la buena fé del demandado; con tales fundamentos este Juzgado falla definitivamente:

Primero; se declara legal la excepción opuesta por el C. W. Iberri contra el cobro que le hace la Aduana marítima de este puerto de la cantidad de *doscientos cincuenta y dos pesos noventa y seis centavos*, por resto de derechos de las mercancías vendidas á la consignación de aquel en el vapor "Montana" el 11 de Marzo último.

Segundo; en consecuencia, la misma oficina procederá á rectificar la liquidación reclamada con arreglo á lo dispuesto en la sexta de las prevenciones del art. 22 de la ordenanza.

Tercero; caso de no poderse practicar un nuevo reconocimiento de la carga averiada, se sujetará la rebaja de derechos á la prueba obtenida en este juicio. Notifíquese y remítase testimonio de este fallo al C. Administrador de la aduana para los efectos consiguientes. El Juez de Distrito de Sonora, así lo decretó firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.

Señ copias de sus originales que certifico. Guaymas de Zaragoza, Junio diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Mba. G.—A.—Ricardo Serrano.—A.—Pastor Rodríguez.*

CIVIL.

Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon contra D. Luis Zepeda, sobre cobro de réditos que adeuda á la Hacienda pública.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que practicada la diligencia á que se refirió en su anterior dictámen, se le ha vuelto á pasar este expediente, para que en él ejerza su ministerio y pida lo que crea de justicia en el caso.

Así verificándolo, el fiscal comenzará por hacer un ligero análisis de las constancias recogidas, para luego emitir la opinion que se ha formado sobre la resolución que en justicia y según derecho convenga dar en este negocio.

Cumpliendo el ciudadano anotador de hipotecas con las prevenciones de la ley, de dar cuenta con los capitales que se reconocían á la Iglesia ó á alguna corporación, dió aviso oficial, de que en el libro del Becerro habia sin chancelar, una escritura de hipoteca por valor de siete mil setecientos ochenta y un pesos. (7781) tirada á otorgada por D. Juan Ignacio de Arispe, á favor de la Santa Iglesia de esta ciudad, asegurando con la casa conocida hoy por "Hotel de Zaragoza" tal cantidad, cuya escritura habia sido extendida desde el año de 1805.

Con este aviso, se procedió á formar la correspondiente liquidación de la cantidad total que se consideró deberse hasta la fecha, computando el interés del dinero desde aquella época, y resultó: que el total era de once mil setecientos catorce pesos, (11714). Y por esta cantidad y según nota oficial del Ministerio de Hacienda de 31 de Diciembre de 1869, se procedió al juicio respectivo, haciendo efectivo para la Hacienda pública el cobro de ese adeudo, tra-

bándose desde luego ejecución en la casa especialmente hipotecada, y corriéndose todos los trámites hasta el presente estado del juicio, que es el de pronunciar sentencia de remate, ó mandar levantar el embargo, según lo que se ha justificado en autos durante el término probatorio.

En este, el señor apoderado del actual dueño de la finca hipotecada, que lo es el Sr. D. Luis Zepeda, vecino del Saltillo, trató de justificar que el adeudo á la Iglesia que aparecía vivo y sin cancelar, según el aviso del anotador de hipotecas, estaba ya cubierto, desde allí por los años de 1816, habiéndose comenzado á hacer los abonos desde el año de 1804, según el certificado que se presentaba de constancias extractadas de los mismos libros de la Iglesia.

Mas como sucedió que al extenderse ese certificado, que se pidió en forma de requisitoria, con presencia y citación del C. jefe de hacienda, que ha hecho de actor en este juicio, y del que suscribe, se omitieron estas actas, presenciando el acto solamente el Promotor fiscal de la curia eclesiástica, á quien se creyó se refería la cita del promovente, ya por esta causa, y ya principalmente por la confusión que desde luego aparecía por el tiempo en que habían comenzado á hacerse esos abonos, que resultaban desde el año de 1804 cuando la escritura está otorgada al siguiente año, y tambien por lo lacónico de las partidas extractadas el que suscribe, considerando que aquella falta no podía ni debía perjudicar al ejecutado, puesto que él pidió y obtuvo la requisitoria en tiempo hábil, y deseando por otra parte, esclarecer los hechos hasta donde fuera posible, averiguando la verdad sobre si efectivamente estaba ó no pagada esa suma, por la que se había otorgado la escritura, ó las partidas extractadas de los libros se referían á otra deuda que hubiera tenido el mismo señor tambien con la Iglesia, pidió se practicara la diligencia que se registra á fojas 46 de estos autos, á la que

se propuso asistir con objeto de ver personalmente los libros y hacer con presencia de ellos, de las partidas extractadas y de la escritura de hipoteca, las observaciones convenientes.

Y habiéndose así practicado todo, según consta de la referida diligencia de fojas 46, resulta que aunque los abonos comenzaron un año antes de que se tirara la escritura de hipoteca, el origen de la deuda es el mismo: el descubierto en que incurrió el expresado Sr. D. Juan Ignacio de Arispe, y los abonos, se refieren en cada una de las partidas extractadas en la diligencia de fojas 9 del enaderno de pruebas del ejecutado, al mismo descubierto tenido en la administración de diezmos de Coahuila, pues aparece todo esto expresado con la mayor claridad en las dichas partidas; debiendo, en consecuencia de todo esto, y en obsequio de la verdad y justicia, decirse que la deuda á que se refiere la anotación en el libro del Becerro, como en favor de la Iglesia y como responsable la casa conocida hoy por "Hotel de Zaragoza," quedó cubierta desde el año de 1816 en que se hizo el último abono, referente á la misma deuda, y que solo tal vez por algun descuido ó por ignorancia, no se hizo oportunamente en aquel registro la conveniente cancelación, siendo esto el motivo por que ahora se juzgaba como existente aun tal deuda, en favor de la Iglesia.

Siendo, pues, indisputable la verdad de este hecho: que la deuda por que se hipotecó á la Iglesia, la casa conocida hoy por "Hotel de Zaragoza" y con la que se aseguraban siete mil setecientos ochenta y un pesos, fué cubierta en abonos parciales hasta quedar completamente saldada, y libre por consiguiente la casa empeñada; no hay ya objeto en este juicio, ni debe tampoco entrarse al examen y resolución de las otras cuestiones que ageraban, sobre prescripción, valor del registros de hipotecas etc., puesto que el hecho principal, sobre si se debía ó no la cantidad expresada en el re-

giro de hipotecas, ha quedado bien averiguado y se ha llegado á saber de una manera indudable, que para cuando se dió la ley de nacionalizacion de los bienes que administraba el clero, ya se habia pagado esa cantidad al entónces su legitimo dueño; razon por que hoy no se debe repetir el cobro, no obstante de que aparezca viva y sin cancelar la anotacion de la escritura de hipoteca.

Esto supuesto, y por el resultado que ha dado la diligencia de fojas 46 de estos autos, referente á la 92 del cuaderno de pruebas del ejecutado, concluye el fiscal opinando por que se declare libre de toda obligacion y gravamen la repetida casa Hotel de Zaragoza, y se mande en consecuencia de esto entregar á su dueño, levantándose el embargo que se habia hecho de ella al cobrarse judicialmente el adeudo con que aparecía, por la noticia dada conforme á ley, para con la Iglesia.

Monterey diez y seis de Junio de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Antonio Maria Elizondo.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Monterey, Junio veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio que ha seguido el C. gefe superior de hacienda contra D. Luis Zepeda, representado por el Lic. D. Ignacio Galindo sobre cobro de \$7781 siete mil setecientos ochenta y un pesos de principal, y \$3933 tres mil novecientos treinta y tres pesos de réditos que se reconocen á la iglesia catedral de esta Ciudad en la casa conocida hoy con el nombre de Hotel Zaragoza, por hipoteca especial que hizo de ella D. Juan Ignacio de Arispe en Febrero del año de 1805 con expreso consentimiento de su dueño el prebendado D. José Miguel Sanchez Navarro para asegurar el capital referido procedente de un desembolso que tuvo aquel como Administrador

de diezmos de Coahuila, perteneciendo hoy dicho capital al erario de la nacion, por la ley que nacionalizó los bienes del clero, y la casa que reconoce al expresado Zepeda, por compra que hizo á su dueño anterior D. Carlos Sanchez Navarro: vistas las diligencias que practicó dicho gefe, procediendo al embargo de la finca, por haberse rehusado al pago el encargado de ella en ausencia de Zepeda; la providencia que dictó con este motivo, mandando pasarlos á este Juzgado para que se prosiguieran conforme á derecho hasta su conclusion; el traslado que se dió al apoderado de Zepeda, para que dijera si pagaba ó se oponia á la ejecucion, expresando en este caso las excepciones que lo favorecieran: visto el escrito en que formalizó su oposicion, excepcionando que el documento en que se apoya el cobro, no es de los que traen aparejada ejecucion, que la accion hipotecaria ha prescrito, y finalmente que desde el año de 1816 quedó pagada la deuda que se trata de exigir: visto el auto en que se recibió á prueba este juicio por los diez dias de la ley; las que se rindieron de una y otra parte, haciéndolo por la hacienda pública el C. promotor fiscal; el alegato que con vista de ellas presentó el ejecutado, desarrollando las excepciones que opuso, y pidiendo al fin que por el equívoco que padeció el provisor y juez eclesiástico de este Obispado, citando al fiscal de la curia en lugar del promotor de este juzgado para el certificado que expidió, cumpliendo la requisitoria que se registra á la foja 8 de su cuaderno de pruebas, se nombrara un escribano público que con presencia del gefe de hacienda y del promotor fiscal examinara los libros que tuvo á la vista la autoridad eclesiástica, y diera fé de ellos expresando si eran ciertas las partidas que contiene dicho certificado: vista la diligencia que practicó el escribano, da la cual resulta que aquel documento está conforme en todo con las partidas que constan en los libros: visto el dictámen del Ministerio fiscal, quien dan-

do por justificado el pago de la deuda, y prescindiendo por esto de analizar las demás excepciones del ejecutado, es de parecer que se le declare libre de toda obligación, y levantándose el embargo, se le mande entregar la casa en que se trabó la ejecución; y visto finalmente todo lo demás que debió verse y convino tener presente.

Considerando: que el documento en que se ha apoyado el cobro, es el certificado que expidió el anotador de hipotecas, del registro que se hizo en veintidos de Febrero de 1805 de la escritura pública que tiró ese mismo día el expresado D. Juan Ignacio de Arispe en favor de la Iglesia, asegurando con la casa del prebendado Sanchez Navarro, la cantidad de 7781 siete mil setecientos ochenta y un pesos en que salió descubierto por la Administración de diezmos de Coahuila, la cual debía pagar en el término de diez años que correrían desde aquella fecha: que siendo la escritura original la que trae aparejada ejecución, según la ley 1ª tit. 28, lib. 11 de la Novísima Recopilación., el certificado de su registro en el libro de hipotecas que aun permanece sin cancelar, no pudo dar mérito para el embargo, por ser otro el objeto que se propuso la ley al prevenir la anotación de esas escrituras (ley 3ª tit. 16. lib. 10 del mismo Código:) que la excepción de prescripción está acreditada por ese mismo documento, puesto que de él aparece que el plazo de la deuda se cumplió en veinte de Febrero del año de 1815, y que habiendo comenzado desde esta fecha la acción ejecutiva y la real hipotecaria de la Iglesia, ambas habían prescrito en mas de cuarenta años transcurridos para cuando se expidió la ley de nacionalización, no pudiendo por lo mismo adquirir nada el erario de la nación: que prescindiendo del valor de estas excepciones, el ejecutado ha probado con el certificado de fojas 9 de su cuaderno de pruebas, y con la diligencia que practicó el escribano á la 46 de este expediente, que el deudor Arispe en abonos parcia-

les enteró á la iglesia, desde Setiembre del año de 1804 hasta Febrero del 816, la cantidad de \$ 6592, 75 es. seis mil quinientos noventa y dos pesos setenta y cinco centavos: que aunque el adeudo importaba según la escritura la cantidad de \$ 7781 siete mil setecientos ochenta y un pesos, es muy verosímil que la diferencia entre esas sumas procediera de los réditos del plazo concedido, según las explicaciones que ha hecho el ejecutado en su alegato de buena prueba, y que la iglesia lo exhibiera de ellos, por las razones que expone; cuya idea se corrobora con la manifestación que hizo el provisor ante el escribano, al requerirlo sobre el oficio en que el prebendado Sanchez Navarro había dado su consentimiento, para que con su casa se asegurase el pago del descubierto de Arispe. Por tales consideraciones y fundamentos, y de conformidad con las leyes citadas y lo que dispone la 3ª tit. 18. lib. 11 del mismo Código, este Juzgado de Distrito fallar que no debe llevarse adelante la ejecución, mandando en consecuencia que se alze el embargo y se libre al depositario la Orden correspondiente, para que entregue la casa al ejecutado con las rentas que haya percibido. Notifíquese, y sáquense dos copias de esta sentencia, una para remitirse al Ministerio de Justicia, y la otra con copia del dictámen fiscal á la secretaría de la Suprema Corte, conforme á su circular de 31 de Diciembre último.

Yo el Juez de Distrito de este Estado así lo resolví, mandé y firmé actuando con testigos de asistencia. Doy fé.—*Lic. José María Martínez.*—*A. Carlos Landeros.*—*A. Abelardo Morelos.*